

C.A. de Santiago

Santiago, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés.

Al folio 10: a todo, téngase presente.

Al folio 11: a sus antecedentes.

**Vistos:**

Santiago, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés.

**Primero:** Que comparece don Ariel Wolfenson Rivas, abogado, en representación de Diego René Astudillo Romero, ecuatoriano, interpone reclamo de ilegalidad en contra de la decisión amparo Rol C12167-22 del Consejo para la Transparencia, la cual rechazó el amparo solicitado, solicitando se acoja el amparo incoado, y se ordene a los organismos requeridos que entreguen la información solicitada.

Funda su reclamo señalando que niega aceptar la injusticia, actuación ilícita y las mentiras cometidas en contra de su empresa Clínica Milano por parte de la SEREMI de Salud, cuyos funcionarios públicos, en complicidad con un Equipo Periodístico del Canal de Televisión Nacional de Chile, TVN, el día 22 de Agosto de 2019, utilizaron un proceso de fiscalización para realizar un montaje televisivo en contra de la Clínica Milano, revestido de mala fe, con total falta de probidad, lleno de mentiras, ocultamiento de información, suplantación de identidad, injurias y calumnias, abusos de autoridad por parte de los mencionados funcionarios y en complicidad con Doña Rosa Oyarce Suazo, Seremi de Salud en esa fecha.

Indica que estas irregularidades fueron oportunamente denunciadas a las autoridades respectivas de la SEREMI DE SALUD, en un inicio a la misma señora Oyarce, quien en lugar de iniciar un sumario administrativo a fin de investigar y constatar la veracidad de su denuncia se limitó a mentir sobre la identidad de una tercera persona que participó en el proceso de fiscalización a Clínica Milano sin ser una funcionaria de la Seremi de Salud sino una integrante del Equipo Periodístico de TVN.

Precisa que esta tercera persona no fue solo una acompañante como lo afirma la señora Oyarce, sino que fue el nexo directo entre los funcionarios de la SEREMI de Salud y el Equipo Periodístico de TVN para la realización de un montaje televisivo mentiroso cuyas imágenes fueron presentadas en el programa de Informe Especial bajo el lapidario título de “PACIENTES EN



PELIGRO, CIRUGIAS ESTETICAS SIN LEY” afectando y destruyendo el nombre de Clínica Milano.

Refiere que su denuncia también fue presentada a la señora Paula Labra Besserer, quien sustituyó a la señora Oyarce en sus funciones como Seremi de Salud y quien tampoco realizó un Sumario Administrativo que verifique o niegue mis graves acusaciones en contra de los funcionarios de la Seremi de Salud involucrados.

Agrega que lo mismo ocurrió con su denuncia presentada a la señora Helga Balich Pérez, quien sustituyó en el cargo de Seremi de Salud a la señora Labra.

Finalmente, hace presente que el señor Gonzalo Soto Brandt, actual SEREMI de Salud, dio respuesta a su denuncia presentada a su antecesora señora Helga Balich, ordenando un sumario administrativo y designando como investigador al señor Mariano Prieto Durán, quien a su vez nunca consideró las pruebas de sus acusaciones y se basó solo y únicamente en las declaraciones mentirosas del funcionario Esteban Huenchullán y de la funcionaria Claudia Olguín y sin contar con las declaraciones de la señora Luisa González para recomendar el sobreseimiento del sumario administrativo, quien a su vez procedió a archivar la causa, insisto, sin nunca haber considerado las pruebas que tenía.

Alega que la decisión de sobreseer nunca le fue comunicada y debió acudir al Consejo para la Transparencia para que se le informara de tales resultados.

Destaca que el 30 de noviembre de 2022 recurrió de amparo al Consejo para la Transparencia, quienes el 21 de marzo de 2023, después de 111 días corridos, se le informa que *“la resolución de su reclamo ha presentado mayor complejidad por las especiales características del caso en análisis, lo que ha significado revisar con mayor detalle la jurisprudencia judicial en la materia y los criterios establecidos por los Tribunales Superiores de Justicia, con la finalidad de resolver el asunto en discusión”*.

Arguye que el 22 de junio 2023, a 204 días corridos desde su solicitud, recibe de parte del Director General Consejo para la Transparencia el Oficio N° E13111, de 20 de junio de 2023, en el que se le notifica la decisión final de rechazo, fundada en cuanto la SEREMI entregó oportunamente la información consultada.



Afirma que según lo informado por el Consejo previamente, su amparo debía haber sido rechazado mucho antes, a los 110 días que se toma el Consejo para resolverlo a partir de su solicitud.

Refiere que, además, la SEREMI debía haber entregado los resultados de su investigación de manera directa, sin la necesidad de que acudiera al Consejo para la Transparencia, pues de no haberlo hecho no habría recibido los resultados.

Arguye que, en primer lugar, el Consejo para la Transparencia dispuso que su denuncia presentaba mayor complejidad por las especiales características del caso en análisis y, a pesar de ello, concluye con el rechazo porque el órgano entregó oportunamente la información consultada.

En segundo lugar, afirma que la información que la SEREMI de Salud le entregó, después de haber tenido que presionar a través del Consejo para la Transparencia, es falsa y mentirosa porque está basada en una investigación incompleta y parcializada que jamás contrastó las declaraciones de los funcionarios involucrados con las pruebas que tiene.

Conforme lo expuesto, solicita se ordene al Consejo para la Transparencia acoger el amparo incoado, en todas sus partes a efectos de que los organismos entreguen la información solicitada.

**Segundo:** Que el traslado del reclamo fue evacuado por David Ibaceta Medina, director general y representante legal del Consejo para la Transparencia, y pidió el rechazo del reclamo en todas sus partes, con costas.

Expuso que en razón de los antecedentes que fundan el amparo interpuesto, la decisión reclamada se ajusta a derecho y al espíritu del constituyente en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Alegó en primer término que el reclamante no señala con claridad y precisión cuál o cuáles serían las ilegalidades cometidas por el Consejo, por lo que el reclamo debe ser rechazado de conformidad a lo establecido en el artículo 28 de la Ley N° 20.285.

Precisa que la norma impone como requisito señalar con precisión y claridad las normas legales o reglamentarias que se estiman infringidas en la decisión recurrida, y debe explicarse de qué forma se habrían vulnerado y cómo ello tornaría ilegal lo resuelto, en atención a la naturaleza jurídica de



derecho estricto del reclamo interpuesto, requisitos que no se cumplen en el caso en estudio.

Afirma que el reclamante basa su reclamo en una mera disconformidad con lo decidido por la Corporación, al haber fundado su reclamo en la no aceptación de la injusticia, actuación ilícita y las mentiras cometidas en contra de su empresa Clínica Milano por parte de la SEREMI, sin pedir que se declare ilegal la decisión de amparo, ni señalar qué infracción a la normativa aplicable por parte del Consejo para la Transparencia se habría producido que torne ilegal la decisión.

Alega que, en el presente recurso, el recurrente ni siquiera se limita a mencionar alguna norma legal o constitucional, de lo que concluye que el reclamo carece de fundamentos de derecho y se basa únicamente en una confusa disconformidad, lo que determina que el presente recurso no pueda prosperar.

En cuanto al fondo, refiere que el amparo deducido fue rechazado debido a que lo alegado por el reclamante constituye una disconformidad con el contenido de la respuesta y no una falta de entrega de lo pedido, lo que excede las competencias del Consejo conforme a la Ley N° 20.285, por cuanto el reclamante indica que “la información que la SEREMI le entregó es falsa y mentirosa”, lo que escapa de las funciones y atribuciones que establece el artículo 33 de la Ley de Transparencia para resolver la denuncia del reclamante y al derecho de acceso a la información pública.

Argumenta que la petición planteada por la reclamante excede el marco jurídico del derecho de acceso a la información pública, el que se encuadra en los artículos 5 y 10 de dicha norma.

Por su parte, refiere que el artículo 10, inciso segundo de la Ley de Transparencia, al referirse a los antecedentes a los que se extiende el derecho de acceso a la información no ampara los requerimientos que importan cuestionar las acciones por parte del órgano requerido, y ésta comprende exclusivamente actas, resoluciones, expedientes, contratos, acuerdos y toda otra información elaborada o que se encuentre en poder de los órganos públicos, esto es, que exista materialmente; no encontrándose obligados los órganos de la Administración del Estado a elaborar información que no obra en su poder, en virtud de un determinado requerimiento, ni a realizar determinadas acciones dentro del ámbito de su competencia.



Precisa que lo pretendido por la reclamante es que se contrasten declaraciones de una investigación sumaria que tuvo como resultado un sobreseimiento, requerimiento que excede el marco normativo del derecho de acceso a la información contemplado en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia.

**Tercero:** Que, el sustrato jurídico que presupone el presente reclamo de ilegalidad, considera en primer lugar, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8° de la Carta Fundamental, donde se expresa que: *“El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de publicidad en todas sus actuaciones.*

*Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.”*

Tal consagración de la garantía constitucional determinó la promulgación, con fecha 20 de agosto de 2008, de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, la que en su artículo 32° dispone que: *“El consejo tiene por objeto promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información.”* Además, el artículo 3° preceptúa que: *“La función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella.”*

Es así como el artículo 4° dispone que: *“Las autoridades, cualquiera que sea la denominación con que las designen y las leyes, y los funcionarios de la Administración del Estado, deberán dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública.*

*El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley.”*



Asimismo, el artículo 2° inciso primero, indica que *“Las disposiciones de esta ley serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa.*

Por su parte, el artículo 5° inciso segundo del referido cuerpo normativo, establece que *“Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”.*

Además, el artículo 10 de la legislación antes citada precisa que: *“Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece la ley.*

*El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales.”*

El artículo 11 de la ley referida precisa que *“El derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado reconoce, entre otros, los siguientes principios:*

- a) Principio de la relevancia, conforme al cual se presume relevante toda información que posean los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento.*
- b) Principio de apertura o transparencia, conforme al cual toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas.*
- c) Principio de máxima divulgación, de acuerdo al que los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo*



*sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales (...)*”

A su turno, el artículo 13, señala que *“En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario. Cuando no sea posible individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, el órgano requerido comunicará dichas circunstancias al solicitante.”*

**Cuarto:** Que, establecido el marco constitucional y legal aplicable en la especie, se hace necesario precisar que lo esencial de los cuestionamientos planteados por la reclamante de autos, se circunscribió a censurar la Decisión de Amparo Rol C12167-22 del Consejo para la Transparencia, la que rechazó el amparo solicitado por el recurrente, solicitando se acoja y se ordene a los organismos requeridos que entreguen la información solicitada en los términos pretendidos por el actor.

**Quinto:** Que atendida la naturaleza del presente arbitrio -de derecho estricto- y dado que el reclamante no ha denunciado con claridad y precisión las normas infringidas y las supuestas ilegalidades cometidas por el Consejo para la Transparencia, el reclamo desde el punto de vista formal debe ser rechazado, de conformidad a lo establecido en el artículo 28 de la Ley N° 20.285, atendido que dicho precepto dispone: *“El reclamo deberá interponerse en el plazo de quince días corridos, contado desde la notificación de la resolución reclamada, deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se formulan”*, aunado a que el sustento del mismo sólo obedeció a la disconformidad del actor con lo decidido por la autoridad recurrida.

En efecto, los artículos 28 y 29 de la Ley de Transparencia establecen una forma de impugnación de las decisiones del Consejo para la Transparencia que denieguen o permitan el acceso a la información, situación que no ha acontecido en la especie, en cuanto se resolvió por la recurrida que lo que se solicitada excedía lo contemplado en los artículos 5 y 10 inciso segundo del citado cuerpo normativo, dado que lo pretendido no revestía la naturaleza propia que permitiría sustentar este arbitrio -el que por



lo demás es de derecho estricto-, por lo que no se pronunció sobre el fondo del asunto.

**Sexto:** Es en ese contexto, correspondía que el recurrente fundara su reclamo, precisando las normas legales que estimaba infringidas y la forma en que ello se concretaba, toda vez que el recurso establecido en el artículo 28 de la Ley de Transparencia, según se ha asentado, es de legalidad.

**Séptimo:** Que, por su parte, en cuanto al fondo, es dable tener presente que el amparo deducido fue rechazado debido a que lo alegado por el reclamante constituye una disconformidad con el contenido de la respuesta y no una falta de entrega de lo pedido, lo que excede las competencias del Consejo para la Transparencia conforme a la Ley N° 20.285, por cuanto el reclamante indica que *“la información que la SEREMI le entregó es falsa y mentirosa”*, lo que escapa de las funciones y atribuciones que establece al efecto el artículo 33 de la Ley de Transparencia para resolver la denuncia del reclamante y al derecho de acceso a la información pública.

**Octavo:** Que en consecuencia, lo pretendido por el actor excede el marco jurídico del derecho de acceso a la información pública -artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia-, por cuanto la competencia de la autoridad recurrida radica en obtener la que obre exclusivamente en actas, resoluciones, expedientes, contratos, acuerdos y toda otra elaborada o que se encuentre en poder de los órganos públicos, esto es, que exista materialmente; mas no realizar requerimientos que importan cuestionar las acciones por parte del requerido, dado que lo que persigue mediante el presente recurso es que se contrasten declaraciones de una investigación sumaria que tuvo como resultado un sobreseimiento.

**Noveno:** Que de esta forma, habiéndose fundado la decisión en el incumplimiento de lo dispuesto por los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, conforme a los cuales se estimó no estar en presencia de una solicitud de acceso a la información pública, en los términos establecidos por la ley, incumbía al actor estructurar su reclamo en torno a tales normas y conclusiones jurídicas, lo que no aconteció, configurándose así un primer obstáculo para el éxito del reclamo.

**Décimo:** Sin perjuicio de lo anterior, cabe consignar que si bien el artículo 10 de la Ley del Transparencia consagra el derecho de toda persona





a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, lo es en la forma y condiciones establecidas por dicha ley, precisando que el derecho de acceso a la información comprende el de acceder a las informaciones contenidas en actos y resoluciones, actas expedientes, contratos y acuerdos, así como toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, lo que no se corresponde con lo que se reclama en autos, según se ha desarrollado latamente en las motivaciones que preceden, motivo por el cual se impondrá condena en costas al reclamante.

**Undécimo:** De esta forma, corresponde concluir que la Decisión de Amparo Rol C12167-22 emitida por el Consejo para la Transparencia se encuentra ajustada a derecho, habiéndose dictado dentro de las atribuciones y competencias que expresamente le fueron establecidas, conforme lo previenen el artículo 8 de nuestra Carta Fundamental y los artículos 5, 10, 13, 24, 28 y 33 de la Ley de Transparencia, no configurándose en consecuencia ilegalidad alguna en su adopción.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley N° 20.285, **se rechaza** el reclamo de ilegalidad interpuesto por don Ariel Wolfenson Rivas en representación de Diego René Astudillo Romero en contra de la Decisión de Amparo Rol N° C-12167-2022 dictada por el Consejo para la Transparencia con fecha trece de junio de dos mil veintitrés, que rechazó el Amparo por denegación de acceso a la información deducido por el recurrente, con costas.

Regístrese y comuníquese.

**Rol N° 436-2023**





LXFXXHTMBD

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Graciela Gomez Q., Veronica Cecilia Sabaj E. y Abogado Integrante Sebastian Ramon Hamel R. Santiago, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

